

Durante el año 2002, según la base de datos del Comité de Asesores del Ministerio del Interior, se registraron 5132 acciones de protesta entre paros, huelgas, bloqueos de carreteras y vías públicas, marchas, tomas de locales, invasiones –con la consecuente destrucción de la propiedad– y enfrentamientos con la Policía, lo que ha sido denominado por altas autoridades del gobierno como una verdadera conmoción social.

Protesta social y violencia

Dante Vera Miller

Pero más allá del número y de lo masivo de la protesta, ya de hecho preocupante, interesa analizar otras cuestiones: el nivel de radicalidad y violencia de los protestantes; el comportamiento de los sectores políticos, autoridades locales y medios de comunicación; y la actuación de las instancias del Ministerio Público y el Poder Judicial frente a estos hechos, así como los efectos que estos han implicado sobre el reducido presupuesto y los esfuerzos de la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y el orden interno.

Un asunto no solo policial

Quienes nos comprometimos con la reforma policial como parte sustantiva de la consolidación democrática del país durante la gestión de los ministros Rospigliosi y Costa, asumimos el desafío de canalizar el conflicto social

por medios políticos e institucionales porque entendíamos que para mantener el orden público se requiere de una base mínima de justicia, derechos y libertad. Por lo tanto, la protesta social no es una cuestión meramente policial, sino un asunto de buen gobierno, de escuchar a la gente y encontrar solución, dentro de lo viable, a sus demandas; lo que por cierto es, en un país de exclusiones, una forma de buscar la integración social.

Un problema de interlocución

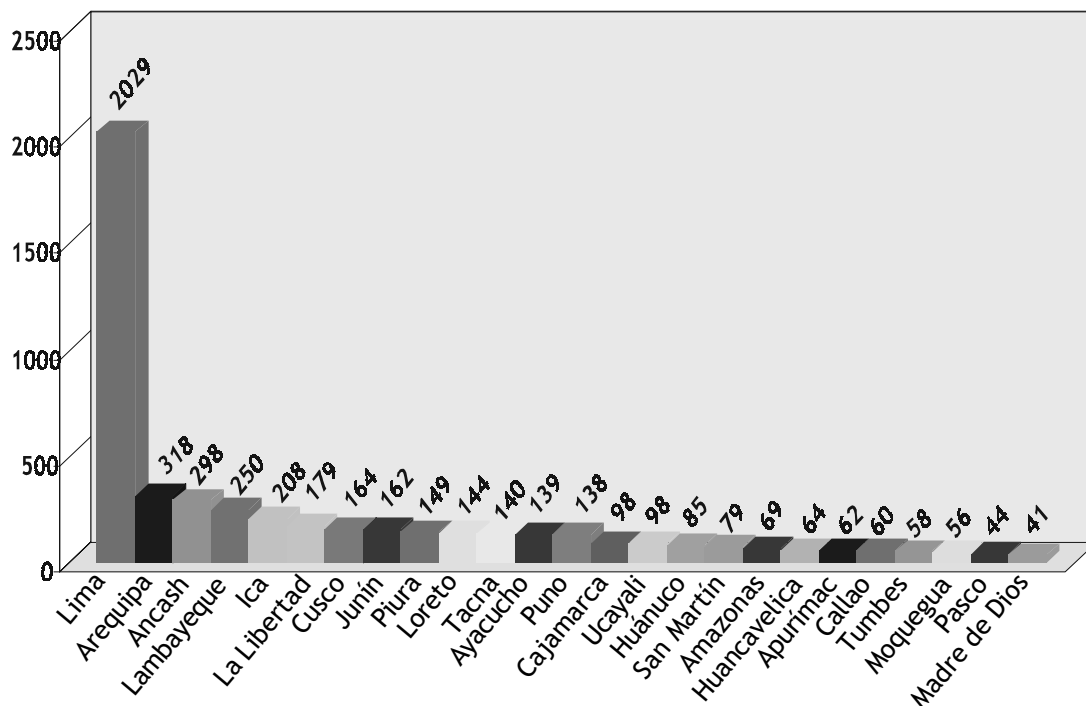
Sin duda, la principal dificultad para el manejo del conflicto social desde el Ministerio del Interior, aparte de los problemas históricos y las conocidas limitaciones del presupuesto nacional, ha sido la interlocución con los líderes sociales y políticos. Esta ha estado marcada por una

estrechez de objetivos nacionales compartidos y por una tremenda desconfianza y agresividad, además de la debilidad en la representación de los propios líderes, que exigían el diálogo directo con la población y más de una vez confesaron sentirse sobrepasados por sus bases cuando los actos vandálicos se apropiaban de la protesta social.

Más allá de la justeza o no de las demandas, los cuarenta paros regionales ocurridos durante el 2002 se convirtieron en su mayoría en escenarios de movilizaciones violentas que obligaban al cierrapuertas y a la paralización del transporte, haciendo de esa manera efectivo el decreto de paro acordado por los frentes de defensa y los alcaldes. Los 376 bloqueos de

Dante Vera, ex asesor de los ministros del Interior Fernando Rospigliosi y Gino Costa.

5132 acciones de protestas en el año 2002



Fuente: Base de datos del COAS MININTER, *Conflictos sociales 2002*.

carreteras dieron lugar en ocasiones a que bandas de delincuentes asaltaran a los pasajeros y destruyeran los vehículos atrapados, como ocurrió en Nasca (enero del 2003), y que reclamos puntuales como la construcción de un puente llevaran a tomar acciones temerarias que pusieron en grave riesgo instalaciones de seguridad nacional (oleoducto norperuano) o clausuraron servicios como el de la energía y el agua, violando los derechos de la población (Bagua Chica).

¿Se justifica tanta violencia? ¿Quiénes son los responsables de los cuantiosos daños y víctimas producidas? ¿Solo el gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad de los dirigentes sociales y políticos?

Un sincretismo sui géneris

Podríamos decir que se ha producido un extraño sincretismo entre una cultura de derechos que se ha expandido entre la gente —lo cual es muy positivo— y los códigos de conducta y las formas de convivir aprendidas durante la guerra interna, la informalidad y corrupción que nos ha tocado vivir a los peruanos en las últimas dos décadas. Se trasladan entonces a la protesta social procedimientos informales, subversivos o delincuenciales, sin que ello quiera decir que los dirigentes sean subversivos o delincuentes. Esto exige un tratamiento complejo y delicado del conflicto social no solo por las autoridades y la policía sino también por parte de los

propios dirigentes y de los demás actores como los medios de comunicación, entre otros.

Si a este tipo de protesta social se le responde solo con represión policial, estaríamos abriendo más las brechas de la inequidad y la exclusión en el país, y aumentando los factores de ingobernabilidad. Por ello resulta no solo equivocada sino incluso peligrosa la acusación, a quienes estuvimos al frente del Ministerio del Interior, de ciertos sectores de la prensa y del propio gobierno de haber sido blandengues ante las protestas sociales. Pero, también, si no nos atrevemos, por otro lado, a denunciar y sancionar a quienes violentizan la protesta social, estare-

mos dando señales equivocadas, en el sentido de que son la fuerza delictiva y la impunidad los componentes de la política y los requisitos para resolver favorablemente las demandas sociales.

Una estrategia multidisciplinaria e integral

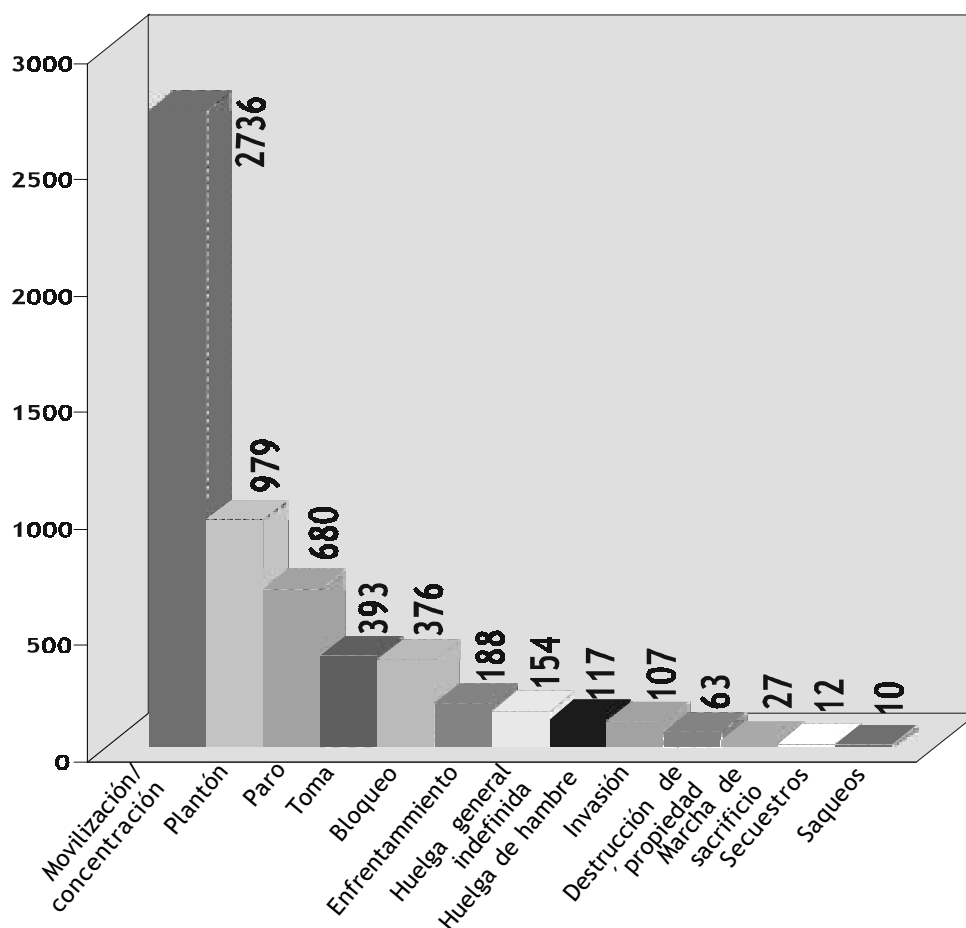
Desde el Ministerio del Interior aplicamos una estrategia multidisciplinaria e integral en el manejo del conflicto social que, como se ha dicho, llegó a tener características de conmoción social durante el 2002, estrategia que sin duda ayudó al

gobierno a sortear sus momentos más difíciles. Con la Policía Nacional construimos un sistema de inteligencia preventiva orientada a identificar los focos de tensión social, sus causas y actores, no para aplacar el conflicto y reprimirlo, sino, como ya dijimos, para canalizarlo por medio de la acción política.

Una primera instancia para ello eran las reuniones semanales con los ministros y asesores principales en el llamado gabinete de crisis, cuya finalidad era tomar conocimiento y decidir las

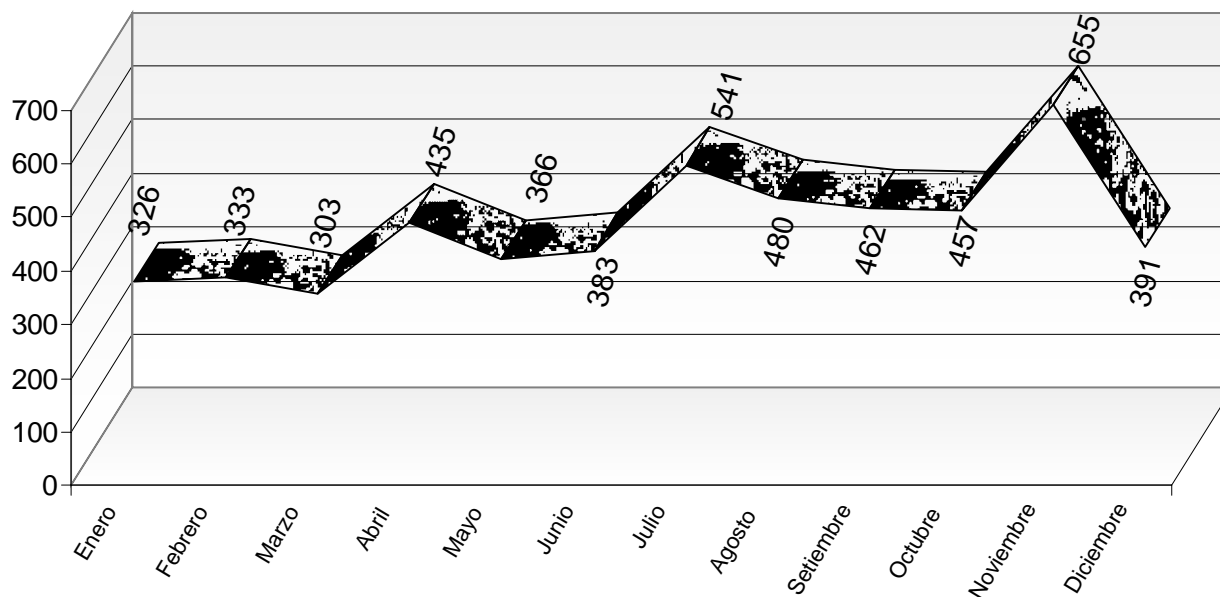
acciones inmediatas. Una segunda instancia fueron las llamadas mesas de diálogo, integradas por ministros o sus representantes ante la debacle de las autoridades locales (prefectos, presidentes de CTAR, parlamentarios), que sin duda merecen un balance aparte. Y, desatado el conflicto en su fase de acciones de protesta, el ministerio movilizaba a la localidad un equipo integrado por operadores políticos, prensa, procuraduría y efectivos policiales de refuerzo para actuar en armonía con el jefe policial de la región.

Incidencias de tipo de acciones en el año 2002



Fuente: Base de datos del COAS MININTER, *Conflictos sociales 2002*.

Número de acciones de protesta durante el año 2002



Fuente: Base de datos del COAS MININTER, *Conflictos sociales 2002*.

Dado el número, lo masivo y la radicalidad de la protesta social durante el 2002, y a pesar de la destrucción y el número lamentable de víctimas, estas resultan en proporción menores de lo que un mal manejo del conflicto hubiera significado y que sin duda habría agudizado los riesgos de gobernabilidad en el país. Ese es el aporte del equipo del Ministerio del Interior que hoy está fuera por razones que aún no quedan claras.

Pero cabe señalar que un efecto de la protesta social ha sido también el gasto de recursos del escaso presupuesto de la Policía Nacional en la movilización de efectivos y uso de instrumentos que bien podrían haberse destinado a otras áreas

prioritarias como la seguridad ciudadana y el orden interno. En el proceso de la reforma policial, un punto sustantivo es repotenciar las comisarías para vincularlas a las autoridades locales y organizaciones sociales en función de un plan local de seguridad ciudadana, lo cual requería sin duda de recursos que bien pudieron ser utilizados si la magnitud del conflicto no hubiera tenido las proporciones que tuvo.

De la misma manera, el orden interno exige combatir sin desmayo el narcotráfico y los remanentes del terrorismo, cosa que se hizo desde el Ministerio del Interior con gran esfuerzo y profesionalismo de la Policía Nacional, pero que hubiera podido ser más sostenida si hubiéramos contado con más recursos.

Ha llegado el momento en que los hombres y mujeres del Perú, de sus diferentes pueblos y regiones, nos pongamos de acuerdo no solo en los grandes objetivos nacionales, sino también en los procedimientos y mecanismos para alcanzarlos y superar las brechas históricas de inequidad y desigualdad.

La organización, vigilancia y protesta social son consustanciales a la democracia, pero es imposible construir ciudadanía con la consigna coreada hoy por los protestantes: "Si no hay solución, hacemos la cagada", que reemplaza a la consigna de los años setenta y ochenta: "Si no hay solución, la huelga continúa". ▲